



indepaz

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz

HACER TRIZAS EL PLAN DE SUSTITUCIÓN (1)

- Lo dice el Director(e) del PNIS en la Presidencia de la República -

Camilo González Posso
Presidente de Indepaz
Bogotá D.C. 27 de enero de 2020

El Director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Hernando Londoño Acosta, ha dicho con todas las letras que el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) comenzó mal en el gobierno anterior y que es imposible cumplir con lo que se definió como primera fase llamada Plan de Acción Inmediata. La meta de sustitución pactada en aplicación del punto 4 del Acuerdo de Paz, en el discurso del gobierno, queda reducida a su mínima expresión y sólo sirve para cumplirle a medias – sin proyectos productivos, sin acceso a tierra o a otros ingresos - a los que se inscribieron antes del inicio del actual gobierno.

En suma, dice Londoño, no hay plata para un compromiso exorbitante pues “Conseguir \$3,6 billones es más de lo que vale la reforma tributaria en un año. ¿Entonces de dónde sale la plata? ¿Se la quitamos a salud, a educación, a vivienda, a quién se la quitamos que no haya paros?”. Se refiere a los contratos firmados hasta agosto de 2018, con 99.000 pequeños cultivadores para ejecutar en dos años los pactos de sustitución y comenzar proyectos productivos de emergencia. Eso suma 36 millones por familia. A ese costo le agrega la solicitud de otros 115.000 pequeños productores y la cifra para los primeros cuatro años se eleva a más de 7 billones en planes hasta 2023, 1,8 billones por año. Y como conclusión se limita a hablar de 700.000 millones presupuestados en 2020 para pagar algunas de las deudas que se arrastran desde 2017.

El argumento de la falta de recursos es en realidad el pretexto para abandonar el programa de sustitución y dejarlo como un asunto marginal de la estrategia de erradicación forzada con operaciones militares y “acción integral”. La desfinanciación del PNIS en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto 2020 es el resultado de una decisión política y de la evaluación de prioridades que hace el gobierno.

Basta recordar que el año pasado la Ministra de Transporte y Obras Públicas, en acuerdo con el Ministro Carrasquilla y seguramente con el visto bueno de su jefe, el Presidente Iván Duque, no dudó en anunciar la disposición de entregarle a su exjefe Sarmiento Angulo, 2 billones de pesos como reconocimiento de supuestos gastos en el proyecto de ese grupo económico con Odebrecht. Ese regalo se frustró pero mostró que cuando quieren pueden. Para no ir muy lejos, el acuerdo político del Gobierno Juan Manuel Santos con Germán Vargas Lleras incluyó el programa de entrega de 100.000 viviendas gratis en cuatro años. Le asignaron casi 4 billones de pesos y ya en agosto de 2014 Vargas Lleras hablaba de la contratación de 70.000 viviendas por un valor de 2,7 billones que equivalen a 38,5 millones de pesos por familia sin contar las obras de infraestructura urbana y otros costos.

¿De donde sale la plata? Cada vez que los gobiernos quieren manipular presupuestos le preguntan a la gente del común: ¿cuantos niños dejamos sin escuela para atender su solicitud? Pero si se trata de subsidios a las grandes empresas la pregunta es ¿Cuánto quiere que le rebajemos en impuestos? Es



indepaz

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz

siempre un asunto de intereses y prioridades y en este caso no pueden imaginar dedicar parte de los ingresos no previstos en 2019 en el Banco de la República o por mayor valor en las cuentas de Ecopetrol a favor del presupuesto. Con parte de esa plata, y de otros guardados que tiene Hacienda para repartirle ingeniosamente a los amigos “emprendedores”, alcanza y sobra para darle respuesta integral a 250.000 pequeños cultivadores de coca que están listos para los programas de sustitución, que ojalá sean reestructurados y mejorados con base en la experiencia de los Planes de Acción iniciales.

Es la incoherencia total en la política sobre narcotráfico y respuesta social a 400.000 familias que están inmersas en la economía de la coca directamente y en actividades legales subordinadas en esas zonas. En lugar de hablar de un gran plan de desarrollo con inversiones extraordinarias – un plan marshal en el posacuerdo pidió Francisco de Roux en 2017- se aprestan para relanzar otro plan de guerra, con zonas estratégicas militarizadas, fumigaciones carísimas con glifisato, sobre costo en presupuesto militar en varios billones de pesos y otros etceteras.

Estados Unidos ofreció 16 billones de pesos pero no para los planes de sustitución sino para la estrategia de erradicación forzada y sus componentes sociales al estilo de los planes de consolidación del Plan Colombia. Les resultaría más efectivo dedicar esos recursos a la implementación del punto 4 del acuerdo de paz, pero está claro que el interés no es atender a la población que quiere salir de la coca y de la trampa del narcotráfico sino amarrar al gobierno y a las fuerzas armadas a los designios de la Administración Trump. Esto es más caro pero más funcional a la estrategia geopolítica en la región. El señor Hernando Londoño es una ficha menor en ese tablero.

camilogonzalezposso@gmail.com